

Bolivia: Fuerzas políticas y económicas en Santa Cruz de la Sierra y la resistencia

análisis
y debate

Bolivia: Fuerzas políticas y económicas en Santa Cruz de la Sierra y la resistencia

La actual posición del departamento de Santa Cruz en Bolivia

Pablo Guzmán Silvestre¹

El presente *dossier* ofrece una mirada a Santa Cruz, Bolivia, distinguida como el bastión de la oposición boliviana al régimen del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). En un escenario posterior a la crisis política boliviana de 2019, desde Santa Cruz, en los tres artículos aquí reunidos se comprenden y exponen las bases económicas, políticas y sociales del liderazgo del departamento y sus élites en el campo político, económico y social en las últimas dos décadas.

Santa Cruz es un departamento ubicado al sureste del Estado Plurinacional de Bolivia, en los Llanos orientales o Tierras bajas, región geográfica boliviana que comprende la Amazonía, Chiquitania y Chaco. Con una superficie de 370 621 km², Santa Cruz representa el 33,7 % del territorio del país. Es el departamento con mayor crecimiento poblacional y el mayor polo de atracción de la migración interna; hasta 2022, la población del departamento alcanzó los 3,4 millones de habitantes, equivalentes al 28,5 % de la población total nacional, de acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su alto índice de población

Portada: Mburubichas guaraníes en resistencia contra la hidroeléctrica Rositas en el Río Grande, comunidad Tatarenda Nuevo, municipio Gutiérrez Kereimba Iyambae. Santa Cruz

Autor: Jorge Ibañez, Santa Cruz, 21-07-2018.

¹ Investigador en asuntos históricos, urbanos, políticos, artísticos y literarios de Santa Cruz. Sociólogo por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

migrante de diferentes regiones de Bolivia, se ha distinguido como el “crisol de la bolivianidad”. Su capital, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es el centro político y administrativo del departamento, foco de irradiación de las demandas y acciones de resistencia de la oposición boliviana al MAS.

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el departamento de Santa Cruz participó en el breve auge de la goma elástica, su primera articulación con la economía capitalista, acumulación originaria para élites emergentes (Soruco, 2008), y un inusitado protagonismo en la economía nacional que se interrumpió con la caída de los precios de este producto hasta la década de los cincuenta, tras décadas convulsas de demandas regionales de integración nacional, procesos políticos de resistencia y lucha que históricamente han sido un factor de conflictividad entre la región y el Gobierno Nacional (Dory, 2009; Rodríguez, 1993). Durante el régimen triunfante en la revolución nacional de 1952, el despegue económico del departamento fue impulsado por la mejora de la vinculación vial con el occidente del país; la obtención del 11 % de las regalías petroleras; el impulso de la diversificación productiva, para la sustitución de importaciones; la migración dirigida y espontánea en lo que se conoció como la “Marcha hacia el Oriente”, sobre la base del Plan Bohan; y la conformación de instituciones autárquicas de gestión pública como el Comité de Obras Públicas del departamento (COOPP) y la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ). Estos son solo algunos de los hitos históricos de la actual posición del departamento a nivel nacional (Dory, 2009).

Con la mirada puesta en la estructura y la situación económica de Santa Cruz, Gonzalo Colque aborda la emergencia de la economía regional a partir del papel decisivo que jugó el *boom* de la agricultura de monocultivos. El autor argumenta que, si bien la dinámica de cambio incidió en la mejora socioeconómica, también profundiza la dependencia de actividades extractivas, es insuficiente para eliminar la vulnerabilidad de la población pobre y persiste el costo ambiental asociado a la deforestación.

En una aproximación al campo político cruceño, Helena Argirakis aborda la estructura, construcción de narrativa y acciones políticas de la principal institución aglutinadora de la oposición local al régimen del MAS, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, durante la realización del paro cívico de 36 días de 2022. Esta autora evalúa las cambiantes correlaciones de fuerzas entre las derechas cruceñas y el Gobierno Central del MAS, así como los sucesivos esfuerzos de desgaste del Gobierno de parte de las derechas, entre los años 2020 hasta el presente.

Claudia Cuellar y Angélica Becerra reflexionan sobre los movimientos históricos de Tierras Bajas y sus demandas —más allá y a pesar del liderazgo político del Comité Pro Santa Cruz—, entendidas como luchas en defensa de la vida, en medio de un proceso de división, desmovilización y crisis organizativas. En este escenario, distinguen renovados flujos y formas de organización social autónoma que se están dando en la región para transformar los ritmos inusitados del crecimiento capitalista que ensambla múltiples violencias.

Estas lecturas invitan y desafían a las izquierdas a comprender las bases económicas e ideológicas de la hegemonía de fuerzas políticas de derecha que ascendió brevemente al poder durante la crisis política boliviana de 2019, desde el departamento de Santa Cruz, y que en la última década ocupa una posición determinante en la coyuntura económica y política del país.

Referencias

- Dory, D. (2009). *Las raíces históricas de la autonomía cruceña. Una interpretación política*. El País.
- Rodríguez Ostría, G. (1993). *Poder central y proyecto regional, Cochabamba y Santa Cruz en los siglos XIX y XX*. ILDIS/IDAES.
- Soruco, X. (2008). De la goma a la soya. El proyecto histórico de la élite cruceña. En: Ximena Soruco (coord.), *Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy*, pp. 1-100. Fundación TIERRA.

Santa Cruz, la “locomotora” económica de Bolivia. Una mirada crítica sobre la reciente transformación productiva

Gonzalo Colque¹

Resumen

En este artículo se analiza, desde una mirada crítica, la reciente transformación económica de Santa Cruz, Bolivia, prestando atención a las implicaciones socioeconómicas y ambientales que tienen connotación nacional. Se aborda la emergencia de la economía regional a partir del papel decisivo que jugó el *boom* de la agricultura de monocultivos.

El despegue de Santa Cruz

En los últimos treinta años, el departamento de Santa Cruz se convirtió en el principal polo económico de Bolivia. La región experimentó un despegue sostenido, llegando a rebasar a La Paz, la sede de gobierno que anteriormente liderizaba la economía nacional. Al día de hoy, la economía cruceña ocupa el primer lugar entre los nueve departamentos del país, en cuanto a la participación en el Producto Interno Bruto (PIB), exportaciones, importaciones, entre otras dimensiones económicas, productivas y sociales. El despegue de la región tropical tuvo lugar a partir del auge y consolidación de la agricultura de monocultivos orientada a la exportación. Santa

¹ Economista con especialidad en desarrollo rural. Tiene una maestría en estudios agrarios y ambientales del Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS, por sus siglas en inglés) de La Haya-Países Bajos. Actualmente es investigador senior en Fundación TIERRA-Santa Cruz.

Cruz mecanizó el agro, adoptó los cultivos genéticamente modificados, introdujo el uso de agroquímicos a mediana y gran escala y amplió la frontera agrícola. Los cultivos de soya resistente al herbicida Roundup Ready (soya RR) fueron decisivos para la transformación (Pérez, 2007; McKay, 2018). Por todo esto, Santa Cruz es conocido como la “locomotora económica” de Bolivia.

Los antecedentes se remontan a la década de 1990, cuando una serie de reformas y hechos convergieron en el mundo y en América Latina, por lo que Bolivia también experimentó cambios en diversos aspectos políticos, económicos y sociales. El país emprendió varias reformas neoliberales para la apertura y liberalización de los mercados. Las reformas contemplaban el relanzamiento del llamado Plan Bohan, un proyecto de desarrollo regional para Santa Cruz de inicios del siglo XX. En concreto, el Banco Mundial (BM) diseñó e implementó el proyecto “Tierras Bajas del Este” a partir de 1991, con el objetivo de expandir la agricultura mecanizada de Santa Cruz y sentar las bases para la asistencia técnica y financiera utilitaria para el cambio del uso del suelo (Colque, 2014). Las políticas de los noventa facilitaron la incursión y llegada de capitales transnacionales al sector agropecuario de Santa Cruz.

El proyecto del BM fundamentó la introducción de soya RR. En 1996, Monsanto difundió en el mercado global la semilla genéticamente modificada (GM) y el herbicida de glifosato (Roundup Ready). La aplicación directa y masiva del herbicida sobre los campos de cultivos GM transformó la manera de hacer la agricultura. Se impuso un nuevo modelo en las tierras tropicales de Argentina, Brasil, Paraguay y la región cruceña de Bolivia.

A 2020, la soya GM se expandió desde 200 mil hectáreas cultivadas hacía treinta años hasta 1,5 millones de hectáreas, llegando a concentrar el 50 % de las tierras cultivadas de Santa Cruz (Fundación TIERRA, 2023).

Situación actual: Santa Cruz como polo de crecimiento

Las estadísticas económicas de 2022 son bastante representativas para describir la situación actual de Santa Cruz. La participación departamental en el PIB nacional alcanza el 30,3 %, seguido por los departamentos de La Paz, con 27,7 %, y Cochabamba, con 14,4 %. Santa Cruz es el mayor exportador de Bolivia, con 33,1 % de participación sobre el total nacional. Sin embargo, tiene alta dependencia de las importaciones, que llegan al 34,3 % del total nacional. Aunque es la región de mayor movimiento económico, ocupa el cuarto lugar en cuanto al PIB per cápita (3667 dólares), después de Tarija, Oruro y La Paz (INE, 2022).

Cuadro 1. Santa Cruz: principales indicadores, 2021-22²

Nº	Variables	Santa Cruz	Bolivia	Participación departamental
1	PIB (millones de USD)	12 334 Agricultura 19 % Industria manufacturera 16 % Sector financiero 10 %	40 702	30,3 %
2	PIB per cápita (USD)	3667	3437	
3	Exportaciones (millones de USD)	4499	13 586	33,1 %
4	Importaciones (millones de USD)	4467	13 041	34,3 %
5	Población (p)	3 425 399	12 006 031	28,5 %
6	Pobreza moderada	25,02 %	36,41 %	
7	Pobreza extrema	3,33 %	11,10 %	
8	Desigualdad (índice de Gini)	0,39	0,42	
9	Tierras cultivadas (ha)	3 010 623	4 179 598	72 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Universidad Católica Boliviana (UCB), FAOSTAT, Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP).

Los principales sectores económicos que contribuyen al PIB cruceño son la agricultura (19 %), la industria manufacturera (16 %) y el sector financiero (10 %). La agricultura mantuvo un liderazgo indiscutible durante todo el periodo de transformación, particularmente en el último quinquenio, debido al aumento de la producción y de los precios internacionales de la soya y derivados.

Santa Cruz también se convirtió en el principal polo de atracción de la migración interna de Bolivia. El último censo (2012) reportó que era el segundo departamento más

poblado, al concentrar el 26,4 % de la población boliviana, y con una tasa anual de crecimiento demográfico de 2,4 %. Según los datos proyectados para 2022 del INE, Santa Cruz se convierte en la región más poblada de Bolivia, con una población estimada de 3,4 millones de habitantes, equivalentes al 28,5 % de la cifra nacional. Recientemente, el Gobierno Departamental de Santa Cruz dudó de los datos oficiales, por lo que realizó un conteo poblacional propio que llegó a estimar la población cruceña en 4 millones de habitantes, es decir, 18 % mayor con respecto a la proyección oficial (ICE, 2023).³

² Datos de la estimación de la población (INE), exportaciones e importaciones obtenidos para el periodo 2022; PIB, PIB per cápita, índice de Gini y tierras cultivadas a 2021.

³ En octubre de 2022, el Comité Cívico de Santa Cruz protestó en contra del aplazamiento del censo nacional de población ordenado por el Gobierno Central, por lo que llevó a cabo un paro regional de 36 días y apoyó la realización de una encuesta regional para el conteo de la población (*Deutsche Welle*, 2022).

En términos socioeconómicos, la dinámica económica de Santa Cruz incidió positivamente sobre los indicadores sociales. Mientras la pobreza moderada está cifrada en 36,4 % a nivel nacional, Santa Cruz presenta 25 % de incidencia (INE, 2021). El desempeño regional también mejoró en cuanto a la extrema pobreza: 11,1 % en Santa Cruz y 3,3 % a nivel Bolivia (2021). La región cruceña también tiene menor desigualdad en términos del índice de Gini: 0,39 frente a 0,42 a nivel nacional. Ciertamente, el crecimiento económico contribuyó a la mejora de las condiciones de vida.

En el campo ambiental, el costo del crecimiento cruceño es la pérdida masiva de los bosques. La expansión de la frontera agrícola condujo al aumento de la deforestación. Según el informe de 2022 de Global Forest Watch (GFW, 2023), Bolivia ocupó el tercer lugar entre los países del mundo con mayor pérdida de bosques tropicales: 272 097 hectáreas de desmontes, sin contar las pérdidas relacionadas con los incendios forestales. Una vez más se evidencia que los monocultivos son incompatibles con la agricultura diversificada, sistemas silvopastoriles, agroforestería y otros modelos de coexistencia entre áreas agrícolas y bosques.

Implicaciones para la economía

Desde una mirada crítica, este modelo presenta al menos dos puntos problemáticos. Primero, la agricultura de monocultivos no es distinta a las formas extractivas que pre-

dominan en hidrocarburos y minería, lo que significa que el despegue cruceño acaba profundizando el patrón de acumulación basado en la explotación de materias primas. Segundo, tiene altos costos socioeconómicos y ambientales, fundamentalmente porque la agricultura crece a costa de bosques tropicales y amazónicos.

El carácter extractivista de la estructura económica cruceña se puede constatar utilizando la definición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que dice que una economía es de tipo primario-exportador cuando los sectores extractivos tienen una participación igual o mayor al 60 % en las exportaciones (UNCTAD, 2021). Se entiende que a mayor grado de dependencia de materias primas exportables corresponden mayores impactos negativos para el desarrollo económico.

Según los datos de 2022, el sector de hidrocarburos tiene una participación del 29 % en las exportaciones, la minería un 6 % y la agricultura llega al 62 %. Los tres sectores suman una participación del 96 % sobre las exportaciones departamentales. A nivel Bolivia, el índice de participación asciende al 95 %.⁴ Todo esto significa que la economía cruceña, al igual que la boliviana, es de tipo extractivo o altamente dependiente de materias primas. En otras palabras, su patrón de acumulación no ha sido distinto al de Bolivia, con la diferencia de que el agro es determinante para la región.

4 UNCTAD publica de forma bianual un informe global sobre la dependencia del sector primario de los países del mundo, según la clasificación uniforme para el comercio exterior internacional (CUCI Rev.3).

Esta preeminencia de los sectores extractivos contradice la narrativa de los grupos económicos⁵ de Santa Cruz que promocionan la transformación regional como un modelo de desarrollo exitoso, basado en el libre mercado, el comercio externo y la capacidad empresarial del sector privado (IBCE, 2022). Si bien Santa Cruz dinamizó la economía nacional, reprodujo el carácter extractivo o primario-exportador del país. Expandió el extractivismo históricamente anclado en la minería y los hidrocarburos hacia la agricultura.

Entonces, el problema estructural del modelo cruceño sigue siendo el extractivismo que se caracteriza por ciclos económicos inestables y la ausencia de diversificación económica. Aunque Santa Cruz tiene un sector industrial naciente, depende de las importaciones. En la última década, la balanza comercial ha sido reiteradamente deficitaria para el departamento.

Implicaciones socioeconómicas y ambientales

Si bien Santa Cruz es el protagonista de la economía nacional, los indicadores socioeconómicos son más bien modestos. Su PIB per cápita es el cuarto con respecto a las otras regiones. Además, la acentuada migración interna tiende a equilibrar las brechas interregionales.

Aunque la mayoría de la población cruceña no está vinculada directamente a la agricultura, está inserta dentro de una dinámica regional influenciada por la agroexportación. En parte, el aumento de la presión demográfica condujo a la ampliación de la frontera agrícola, pero las posibilidades se agotan. Las disputas por el control y la tenencia de la tierra y los bosques son cada vez más violentas.⁶ Los enfrentamientos o los llamados avasallamientos de tierras crecieron exponencialmente en los últimos años, entre campesinos, indígenas, migrantes, ganaderos, sojeros, medianos y grandes agropecuarios, y otros (CEDIB, 2022).

El reto emergente es la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de los próximos años. Como muestra el cuadro 1, los indicadores sociales no variaron en la misma medida que los cambios en las condiciones de vida, más bien fueron modestos en comparación con el acelerado crecimiento económico. La población vulnerable puede recaer fácilmente por debajo del umbral de pobreza. El agotamiento de las reservas de gas tendrá efectos directos de gran alcance no solamente sobre la economía nacional sino también sobre el agro cruceño.⁷ La baja rentabilidad de la agricultura cruceña ha sido compensada, hasta ahora, con grandes subvenciones al consumo del diésel, provenientes de la renta del gas. Las altas tasas de deforestación están reduciendo rápidamente la fertilidad de los suelos.

5 Entre los más visibles se encuentran la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

6 Este reporte de *Los Tiempos* resume las características de los avasallamientos de tierras ocurridos en los últimos tres años: <https://shorturl.at/acdOR>.

7 Según un análisis elaborado por la consultora Gas Energy Latín América (GELA), Bolivia dejaría de exportar gas natural el año 2029, para pasar a importarlo por un monto de 5700 millones de dólares: <https://shorturl.at/egB38>.

Conclusión

Ciertamente, Santa Cruz se transformó en la nueva “locomotora” económica de Bolivia, pero ello no sucedió como consecuencia de una ruptura con el patrón de acumulación de tipo primario-exportador o extractivista de la economía boliviana. Al contrario, el despegue cruceño reforzó la dependencia de los recursos naturales. Específicamente, consolidó la agricultura de monocultivos orientada a la exportación de la soya. La transformación económica incidió en la mejora de los indicadores sociales del departamento, pero es insuficiente para eliminar las amenazas de retroceso y empobrecimiento de la población vulnerable y migrante. El principal costo ambiental es, sin duda, las altas tasas de deforestación, que sitúan a Bolivia en tercer lugar entre los países del mundo con mayor pérdida de bosques.

La profundización del extractivismo expone a Santa Cruz y Bolivia a escenarios futuros de alto riesgo. La convergencia de múltiples crisis amenaza con el fin de la bonanza basada en recursos naturales. El resurgimiento de la inestabilidad política que suele presentarse en tiempos de dificultades económicas puede empeorar el panorama social en todo el país, además de exacerbar el regionalismo cruceño. En definitiva, la transición hacia economías diversificadas y sostenibles es un imperativo para Bolivia, una necesidad estructural a la que no contribuyó la locomotora cruceña.

Referencias

- CEDIB. (2022, 8 de junio). Cuatro causas estructurales ocasionan los avasallamientos (Los Tiempos, 21.2.22). <https://www.cedib.org/recursos-naturales/cuatro-causas-estructurales-ocasionan-los-avasallamientos-los-tiempos-21-2-22/>
- Colque, G. (2014). *Expansión de la frontera agrícola: Luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano*. Segunda edición. Fundación TIERRA.
- Colque, G., Eyzaguirre, J. L., y Tinta, E. (2023). *Cambio climático en Santa Cruz. Nexos entre clima, agricultura y deforestación*. Fundación TIERRA.
- Deutsche Welle. (2022, 26 de noviembre). Santa Cruz levanta paro tras 36 días de movilizaciones. <https://www.dw.com/es/santa-cruz-levanta-paro-tras-36-d%C3%ADas-de-movilizaciones/a-63904891>
- Fundación TIERRA. (2023, agosto). Cambio climático en Santa Cruz. Nexos entre clima, agricultura y deforestación. <https://ftierra.org/index.php/publicacion/documentos-de-trabajo/245-cambio-climatico-en-santa-cruz-nexos-entre-clima-agricultura-y-deforestacion>
- Global Forest Watch (GFW). (2023, 14 de julio). Empeoró la pérdida de bosques tropicales primarios en 2022, a pesar de

los compromisos internacionales contra la deforestación. <https://www.globalforestwatch.org/blog/es/data-and-research/empeoro-la-perdida-de-bosques-tropicales-primarios-en-2022/>

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). (2022). Modelo de desarrollo cruceño: Factores y valores que explican su éxito. <https://ibce.org.bo/noticias-detalle.php?idNot=851>

Instituto Cruceño de Estadística (ICE). (2023). *Encuesta de estimación poblacional de Santa Cruz*. ICE.

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2021, 21 de diciembre). Pobreza y desigualdad. <https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/censos/>

INE. (2022, 19 de junio). Estadísticas de Comercio exterior. <https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/comercio-exterior/estadisticas-basicas/>

McKay, B. (2018). *Extractivismo agrario. Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia*. Fundación TIERRA. <https://www.ftierra.org/index.php/publicacion/libro/184-extractivismo-agrario-dinamicas-de-poder-acumulacion-y-exclusion-en-bolivia>

Pérez, M. (2007). *No todo grano que brilla es oro: Un análisis de la soya en Bolivia*. CEDLA. <https://cedla.org/publicaciones/prya/no-todo-grano-que-brilla-es-oro-un-analisis-de-la-soya-en-bolivia/>

UNCTAD. (2021). *State of commodity dependence 2021*. UN. https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2021/09/ditccom2021d2_en.pdf

Luchas que se organizan para defender la vida en medio de procesos de desmantelamiento y disciplinamiento en Santa Cruz

Angelica Becerra Brito¹ / Claudia Cuellar Suárez²

Resumen

Consideramos necesario comprender las luchas para defender la vida en Santa Cruz en medio de un proceso de división, desmovilización y crisis organizativas en las que se encuentran los movimientos históricos de Tierras Bajas actualmente, como también los renovados flujos y formas de organización social autónoma que se están dando en la región para transformar los ritmos inusitados del crecimiento capitalista que ensambla múltiples violencias.

Palabras claves: Luchas, despojos, violencias, organización.

Antecedentes: Luchas por el territorio y crisis organizativa en los últimos años

Históricamente, el movimiento indígena en las Tierras Bajas de Bolivia³ se ha organizado demandando tierra, territorio, autonomía, salud y educación, mediante la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que en sus inicios aglutinó a los pueblos indígenas Guaraní, Chiquitano, Ayoreo y Gwarayú (1982). Posteriormente, en 1990, la Coordinadora de los Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) (1989) convocó a la primera “Marcha por el territorio y la dignidad”, encarando acciones conjuntas que

1 Es creadora e investigadora de imágenes, estudios culturales-identitarios y violencias territoriales de Santa Cruz. Acompaña procesos de lucha junto a pueblos indígenas de Tierras Bajas y participa en luchas feministas en Bolivia.

2 Es investigadora feminista de Santa Cruz, Bolivia, doctorante de la BUAP-Puebla, México. Ha escrito sobre feminismos emergentes en Bolivia, lucha de mujeres, violencia y despojo en Santa Cruz.

3 Se denomina Tierras Bajas a la zona de los llanos de Bolivia que comprende alrededor del 64 % del territorio nacional, en el que habitan 34 pueblos indígenas del oriente, el chaco y la amazonía boliviana.

tuvieron como estrategia de lucha histórica las marchas indígenas.⁴ Esta fuerza política visibilizó un conjunto de demandas para reconocer su existencia, identidad, territorios ancestrales y la reapropiación de sus medios de vida (Becerra, 2018).

En Santa Cruz, las organizaciones indígenas locales,⁵ articuladas en la CIDOB, han disputado históricamente sus territorios frente al despojo terrateniente y hoy también las lógicas patronales, ensambladas a la dinámica agroindustrial y petrolera creciente.⁶

El escenario de conflictos en acontecimientos como la implementación de la Nueva Constitución, las Agendas de Desarrollo extractivistas y, de forma concreta, la construcción de la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS),⁷ entre otros hechos, han instaurado una dinámica de desmantelamiento de las organizaciones matrices de las Tierras Bajas, a través de fragmentaciones y disputas políticas partidarias. En la mayoría de estas, se conformaron estructuras paralelas como práctica de

división que conforma organizaciones opuestas a la representación legítima, lo que responde a intereses afines al poder gubernamental, desde donde se han pactado y promovido proyectos extractivistas principalmente en el oriente, el chaco y la amazonía boliviana.

Estas lógicas divisionistas avanzan en los territorios y organizaciones a medida que el despojo⁸ amenaza cotidianamente la vida en las comunidades. Esto, ya que en Santa Cruz se ensamblan los intereses empresariales y regionales, así como los políticos partidarios y transnacionales por el extractivismo creciente, que se desarrolla en medio de las crisis organizativas instaladas como estrategia de desterritorialización continua.

En esta coyuntura también se visibilizan luchas cotidianas y permanentes por la unificación de las organizaciones indígenas encaradas por mujeres de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB),⁹ juventudes y comunidades que vienen promoviendo acciones y estrategias que permitan diálogos y encuentros

4 Desde la década de los noventa a la actualidad se han realizado 11 marchas de los pueblos indígenas de Tierras Bajas, con demandas que van desde el reconocimiento de los territorios y los derechos indígenas hasta luchas concretas como la del TIPNIS.

5 Los 5 pueblos que habitan Santa Cruz se han organizado como Organización Indígena Chiquitana (OICH), Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Central de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG) y la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB).

6 Las formas de despojo en Santa Cruz se desarrollan por medio de lógicas extractivistas, mineras y carreteras.

7 En 2011, durante el gobierno de Evo Morales, se promovió la construcción de la carretera transoceánica que atravesaría el corazón del TIPNIS. En torno a este conflicto, el movimiento indígena de Tierras Bajas de Bolivia organizó la VIII Marcha Indígena “Por la Defensa del TIPNIS, por los Territorios, la Vida, Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas”, que además movilizó a la población boliviana.

8 “Cuando hablamos de despojo estamos tratando de pensar no solo en lo que sucede cuando las condiciones materiales para reproducir la vida se erosionan, sino también en lo que ocurre en términos subjetivos a partir de la supresión de los deseos y las necesidades que construyen a los sujetos en íntima relación con el territorio que habitan” (Navarro, 2014).

9 La CNAMIB integra organizaciones de mujeres indígenas del oriente, el chaco y la amazonía constituidas según sus propias costumbres y normas.

centrados en los intereses de las propias comunidades y pueblos. Estas estrategias invisibilizadas por los poderes buscan el reencauzamiento de los horizontes históricos de los pueblos indígenas de Tierras Bajas, por fuera de la política partidaria.

En este contexto de desorganización y en el que se vienen expandiendo políticas de desposesión territorial y patriarcal en Santa Cruz, miramos de manera conectada las tramas colectivas que sostienen y defienden la vida en territorios rurales y urbanos. Siendo una de nuestras apuestas comprender la conexión entre la violencia en los territorios y la violencia contra las mujeres, y cómo los tejidos que lo resisten se vienen hilando desde una política autónoma.

Las luchas que defienden la vida contra el despojo actual en Santa Cruz

Presentamos, entonces, cuatro maneras en que se han organizado las luchas frente al saqueo y la violencia crecientes en Santa Cruz, consecuencias del avance agroindustrial ensamblado a otros proyectos extractivistas. Así, por ejemplo: a) la lucha contra la hidroeléctrica Rositas,¹⁰ en el territorio del chaco guaraní y los valles cruceños; b) la resistencia liderada por las comunidades del municipio de El Torno, que se opone a la

explotación irreversible de la piedra caliza,¹¹ proyecto que busca explotar cerros para obtener materia prima para la elaboración de cemento, los que amenaza a las fuentes de agua naturales; c) los tejidos de lucha contra el modelo económico violento y ecocida en la ciudad, y d) el despliegue de luchas feministas¹² urbanas contra la violencia patriarcal.

Estas experiencias han surgido desde la propia cotidianidad y autonomía política, en un escenario de desarticulación partidaria de las organizaciones indígenas y un permanente disciplinamiento desmovilizador perpetrados por las fuerzas de poder gubernamental y político local —representadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz—, basadas en lógicas autoritarias de censura, control y violencia.

Tramas comunitarias por los ríos y el territorio

El agua es central para reproducir la vida en las comunidades y su defensa ha sido un eje de lucha y articulación colectiva en el departamento, más allá de las pugnas políticas regionalistas y empresariales. El sentido simbólico y material del agua y los ríos como medios vitales para el funcionamiento de la vida es un punto de partida fundamental y el hilo conector de más de una lucha.

10 Hace parte del complejo hidroeléctrico del Río Grande promovido por la Gobernación de Santa Cruz y el Estado boliviano. Afectará a 23 comunidades en las que habitan 500 familias del chaco guaraní y los valles cruceños (Colectivo Mujeres Territorios y Resistencias, 2019).

11 Este proyecto minero amenaza a alrededor de 2000 familias de comunidades y barrios que habitan en los distritos 6 y 7 del municipio de El Torno. Desde 2022, en la zona se inició una importante lucha en defensa del agua, oponiéndose a la explotación de la piedra caliza (Entrevista realizada por el Colectivo Mujeres Territorios y Resistencias, 2022, www.facebook.com/MujeresTerritoriosYResistencia).

12 A finales de 2018, un caso removió a las jóvenes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se trató de una violación múltiple, conocida también como “la manada”, que hasta la actualidad continúa impune.

A partir del año 2016, a 2018, por ejemplo, las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Rositas emprendieron acciones conjuntas organizadas como *Comité en Defensa de la Tierra y el Territorio* e iniciaron estrategias de defensa legal, como ha sido la demanda directa al Estado boliviano para exigir una consulta popular.

Si bien el proyecto se encuentra paralizado,¹³ las comunidades continúan en alerta ante su ejecución, a través de la difusión, denuncia y desarrollo de acciones autogestivas que han permitido sostener las estrategias legales y de comunicación por medio de lenguajes de movilización que trascienden a nivel interterritorial. Así también, las dinámicas de hostigamiento y persecución han sido resistidas por articulaciones, principalmente protagonizadas por mujeres de diversas edades, que han puesto en tensión las violencias machistas, patriarcales y territoriales.

Esta experiencia de organización comunal puede verse también en El Torno, donde la zona de Espejos, una de las principales amenazadas por el proyecto de exploración minera, conformó un *Comité de Agua* contra la destrucción de las nacientes que transitan hasta el río Pirai. Asimismo, a través de la *Subcentral Forestal de El Torno D-6*, que integra 14 comunidades y 3 barrios, se llevaron adelante estrategias de lucha para anular la licencia ambiental y la licencia de explotación de la empresa, en un contexto de desinformación, engaño y dilatación de las demandas interpuestas por las comunidades.

Los bloqueos de carreteras como medida de presión no resultaron en vano en el municipio, pues permitieron dejar sin efecto la licencia ambiental, aunque aún queda pendiente la anulación de la licencia de explotación. La resistencia de la población de El Torno da cuenta de la capacidad de agencia por la defensa del agua como bien común de las comunidades, no negociable con empresas, el Estado ni el gobierno regional.

Las asambleas, reuniones de emergencia y diversos encuentros comunales, en ambos casos, se sostienen a través de espacios de intercambio, deliberación y decisión sobre la vida colectiva. Estas prácticas de resistencia reorganizadas por comunidades y territorios se basan en la autonomía política que se centra en las afectaciones de la vida cotidiana en los territorios, enfrentando el duro proceso de desarticulación de las organizaciones sociales de Tierras Bajas.

Memoria de resistencia en la ciudad contra el ecocidio y las violencias

Entre los años 2018 y 2019, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se dieron dos importantes acontecimientos que visibilizaron los esfuerzos organizativos contra el despojo y la violencia patriarcal, resultando disciplinados y desarticulados desde el poder.

El ecocidio de 2019 provocó la indignación social contra los incendios¹⁴ y la “quemada de la vida”, siendo un motor movilizador en una importante población de la ciudad, desde

13 El Decreto Supremo 3574 que da curso al proyecto hidroeléctrico Rositas continúa vigente.

14 Se quemaron 6 millones de hectáreas en territorios indígenas y reservas naturales de los departamentos del Beni y Santa Cruz.

lugares de enunciación y posicionamientos que no fueron homogéneos sino múltiples y resistieron más allá de las pugnas político-partidarias. Los lugares de denuncia no cooptados y autónomos fueron visibles en la ciudad, al poner en cuestión el ciclo concatenado de alianzas Estado-empresas.

La población movilizada de manera independiente organizó colectas para apagar los incendios, recolección de alimentos, cisternas de agua, rescate de animales agredidos, como también la conformación de grupos de bomberos voluntarios por la emergencia. Fue visible, además, la generación de alianzas entre colectivos ambientales, feministas y organizaciones territoriales en defensa de la vida y territorios para denunciar cómo el Gobierno, el Comité Cívico y las élites ganaderas y soyeras, en los días en que se quemaban los montes, festejaban acuerdos para la exportación de carne a China (*La Razón*, 2019).

Esta indignación colectiva, tramas y alianzas políticas fueron constantemente violentadas por articulaciones reaccionarias afines al poder local y regional, y desorganizadas durante el proceso electoral y el conflicto político desatado en octubre de 2019. El ecocidio brutal removió subjetividades sociales en todo el departamento, sobre los horizontes, el cuidado y las apuestas por la vida que no han sido totalmente anuladas y disciplinadas por el poder. Estas se tratan de revoluciones situadas y cotidianas que perseveran desde las colectividades de afectos políticos y deseos de transformación contra el saqueo.

Estas formas de resistir fueron visibles también en la lucha contra la violencia patriarcal y la búsqueda de justicia en un caso terrible de violación múltiple en Santa Cruz de la Sierra, denominado como el caso “la manada”.¹⁵ Este movilizó a importantes colectivos feministas emergentes en la ciudad, desde los que se generaron diversos encuentros, marchas, tomas de las instituciones judiciales (Méndez, 2019a, 2019b), acompañamiento a las audiencias, ruedas de prensa, entre muchas tareas concretas para seguir el proceso judicial.

En este escenario se manifestaron dos aspectos importantes. Por un lado, la persecución contra las colectividades feministas que acompañaron el caso mostró los mecanismos desorganizativos que han operado en la ciudad contra las mujeres y las disidencias, como el cansancio, el deterioro de fuerzas, persecución, censura y violencia. A pesar de ello, la trama colectiva que se tejió de manera autónoma ha sido importante para sostener acciones y movimientos urbanos en momentos simbólicos como el 8M y el 25N, así también en acompañamientos a casos concretos contra la violencia. Las formas de hacer lucha feminista se mantienen vivas y se organizan desde la autogestión, el autocuidado y la autodefensa, siendo claves para cuidar nuestra fuerza contra las agresiones patriarcales que se viven en la ciudad.

Estos flujos renovados de organización política y autonomía en el territorio urbano son potencias que están ensayando maneras de

15 La violación grupal se registró en Santa Cruz de la Sierra el 14 de diciembre de 2018. Cinco varones, entre ellos un menor de edad, violaron a una joven aprovechando su estado de inconsciencia por las drogas.

hacer y tramas colectivas que han quedado constantemente invisibilizadas. Construyen sus propias maneras de organizarse irradiando aprendizajes para las resistencias contra los despojos y las violencias que se viven actualmente en la región.

Conclusiones

Nosotras queremos dar cuenta de las importantes políticas de lucha que se están generando en Santa Cruz, en medio de procesos de división política y violencia social creciente. Ante ello, consideramos clave recuperar los hilos que tejen la política autónoma desde distintos procesos y espacios organizativos.

Las demandas por el agua, la violencia, la defensa de los ríos, montes y territorio, como demandas históricas y actuales de organizaciones colectivas están desplegando esfuerzos importantes en Santa Cruz, que quedan opacados por el poder que viene desarrollando apropiaciones de los lenguajes de lucha en defensa de la vida.

Ante ello, creemos urgente identificar la fuerza colectiva contra las dinámicas de cooptaciones de sectores dominantes y develar estas lógicas de actuación desde la experiencia autogestionada y las capacidades políticas de “reencantar nuestros territorios”¹⁶ frente a las lógicas de saqueo.

Referencias

- Becerra, A. (2018). *La lucha de los pueblos indígenas en Bolivia*. PROCESO.
- Colectivo Mujeres Territorios y Resistencias. (2019). Por la defensa de los ríos y la vida. La lucha contra el despojo de la hidroeléctrica Rositas [en línea]. https://issuu.com/mujeresterritorios/docs/por_la_defensa_de_los_r_os_y_la_vida_final_corregi
- La Razón*. (2019, 30 de junio). Bolivia tiene luz verde para exportar carne a China. <https://www.la-razon.com/economia/2019/06/30/bolivia-tiene-luz-verde-para-exportar-carne-a-china-morales-llama-a-ampliar-la-produccion-pecuaria/>
- Méndez, C. (2019a, 1 de julio). Bolivia: ¡que la única manada seamos nosotras! *Marcha*. <https://marcha.org.ar/bolivia-que-la-unica-manada-seamos-nosotras/>
- Méndez, C. (2019b, 30 de julio). Bolivia: “si hay impunidad, hay complicidad”. *Marcha*. <https://marcha.org.ar/bolivia-si-hay-impunidad-hay-complicidad/>
- Navarro, M. L. (2014). Luchas por lo común contra el renovado cercamiento de bienes naturales en México. *Bajo el Volcán* 13 (21): 161-169.

16 En los meses de agosto y septiembre de 2022 nuestra colectividad, Mujeres Territorios y Resistencias, promovió una serie de encuentros virtuales con el tejido feminista de confianza y complicidad política de Bolivia, denominados “Conjuros Feministas para reencantar nuestros territorios”, orientados a dialogar y reflexionar sobre el contexto de violencia, polarización y ecocidio que vivimos las mujeres de distintos territorios de Bolivia. Los encuentros tuvieron como cierre un diálogo potente entre Silvia Federici, Virginia Ayllón y Silvia Rivera Cusicanqui.

Paro cívico indefinido en Santa Cruz. Dos años después de la crisis de 2019 en Bolivia

Helena Argirakis Jordán¹

Resumen

Este artículo aborda la estructura, construcción de narrativa y acciones políticas del Comité Cívico Pro Santa Cruz —considerándolo desde la perspectiva de análisis como instrumento político de las élites de Santa Cruz— durante el paro cívico indefinido de 36 días en esta región, en el año 2022. En el marco de la crisis de 2019, se evalúan las cambiantes correlaciones de fuerzas entre las derechas cruceñas y el Gobierno Central del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), así como los sucesivos esfuerzos de desgaste al Gobierno de parte de las derechas, entre los años 2020 hasta el presente.

Introducción

El Comité Cívico Pro Santa Cruz realizó un paro cívico de 36 días entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022. Dicho paro cívico fue convocado para exigir la realización de un censo de población (inicialmente para el año 2023) al Gobierno Central con el fin de lograr una redistribución de recursos económicos para los departamentos del país según los resultados del censo. Asimismo, se buscaba la redefinición territorial de las circunscripciones de la geografía electoral boliviana, que inciden de manera directa en el número de escaños departamentales para la representación por territorio y por población en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

1 Boliviana. Politóloga, internacionalista, analista política, especialista en geopolítica, docente universitaria e investigadora.

Si bien la determinación de la realización del Censo Nacional quedó prevista para el 23 de marzo de 2024 —luego de que la Cámara de Diputados aprobara una Ley sobre el empadronamiento y la región cruceña depusiera las manifestaciones y protestas—, quedó evidenciada la diferenciación entre el objetivo público del paro cívico (la reivindicación por la realización del censo en 2023) y la construcción de la narrativa política y el método de lucha del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que fue el paro cívico indefinido. En la memoria colectiva de numerosos cruceños y cruceñas, bolivianos y bolivianas, la demanda regional para la realización del censo 2023 fue una narrativa hábilmente estructurada desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz para implementar el paro cívico en defensa de dicha causa, pero, a su vez, se constituyó en una medida radical para generar un desgaste del Gobierno Central y del oficialismo del MAS.

No deja de ser relevante el hecho de que el paro cívico indefinido de 2022 fue convocado en el marco de fechas emblemáticas para las derechas cruceñas: del 23 de octubre al 12 de noviembre de 2019. Es decir, a tres años de las fechas en que el bloque de poder de derechas, liderado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, con Luis Fernando Camacho a la cabeza, inició el proceso de movilización, insurrección y desobediencia civil que dio paso al neogolpismo o al golpe de Estado combinado (Argirakis Jordán, 2022a); estos hechos culminarían con la renuncia forzada y el acortamiento del mandato constitucional del entonces presidente Evo Morales Ayma,

y la instalación del Gobierno de facto de la opositora de derechas Jeanine Añez.

Asimismo, se resalta la similitud entre la dinámica del paro cívico de octubre y noviembre de 2019 —utilizado para forzar la salida abrupta del Gobierno de Evo Morales— y la del paro cívico de octubre y noviembre de 2022 —instrumentalizado para desgastar el Gobierno de Luis Arce—, a pesar de las construcciones de narrativas de legitimación contrarias a las finalidades políticas, en ambos casos.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz como instrumento político de la cruceñidad

En el contexto de este análisis, planteamos que el Comité Cívico Pro Santa Cruz es el *instrumento político de la cruceñidad* al estar por encima del sistema político partidario y fungir como ente coordinador y de definición de la línea política regional. En dicha institución se encuentra el asiento político de la élite cruceña, que proclama que el Comité es el “Gobierno moral de los cruceños”, además de constituirse en la instancia corporativa integrada por numerosas instituciones del ámbito público y privado de Santa Cruz. Por otro lado, en sus 73 años de existencia, ha sido un dispositivo de gestión política regional que se ha reproducido en las provincias cruceñas; además, su incidencia y liderazgo político han trascendido inclusive a otros departamentos del país, articulando espacios de coordinación política con sus agendas correspondientes para la defensa de los intereses de las élites y las clases dominantes.

En el caso específico del bloque de poder en Santa Cruz, podemos evidenciar la existencia de una ideología propia (el regionalismo) que sustenta la hegemonía de la clase dominante local. Dicha producción ideológica se distinguiría de la producción ideológica del Estado nacional en tanto se constata que en la narrativa histórica de la región existe una resistencia o inconformidad con los constructos ideológicos provenientes del Estado nacional, caracterizado como andino, centralista y excluyente. Así se justifica la irresuelta tensión entre Estado-Gobierno Central y región que fundamenta la lucha regional.

La producción ideológica no se da en un vacío, pues existe una serie de mecanismos de la superestructura que interactúan, lo que da lugar a una cosmovisión que fundamenta y justifica un cierto imaginario social. En el caso cruceño, estos mecanismos están contenidos en un *aparato ideológico departamental* que no solo produce y reproduce la ideología o el pensamiento dominante, sino que contiene diversos dispositivos materiales y simbólicos que articulan una gran red de redes o una matriz vertical y horizontal que da sustento y contenido a la hegemonía del bloque en el poder.

La estructura económica cruceña se articula de manera corporativa formando un complejo entramado de instituciones que representan no solo a sectores y actividades económicas productivas, sino también a todo lo relacionado con valores, visiones, intereses y prioridades de la heterogénea burguesía cruceña, y —sobre todo— a la composición

elitista de la clase dominante. La fuerza de la estructura económica corporativa cruceña reside en su capacidad de actuar como un solo cuerpo, unificado, sólido y cohesionado. Este es el primer piso o nivel del aparato ideológico departamental, conformado por el llamado corporativismo cruceño y su esquema institucional de vinculación centralizada.

El segundo nivel del aparato ideológico departamental está conformado por el aparato burocrático administrativo departamental y municipal, o, en otras palabras, la ex-Prefectura o actual Gobernación y el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, ya que desde la fundación del Comité de Obras Públicas se instaló la concepción de la apropiación del espacio público como prolongación de los intereses privados o la utilización de las capacidades instaladas de la maquinaria pública en beneficio de los emprendimientos de la élite endogámica local. En este nivel también opera la universidad pública del departamento, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

El tercer nivel del aparato ideológico departamental está formado por la superestructura ideológica. En esta instancia operan los tradicionales políticos profesionales y el remanente subsistema político partidario, además de las agrupaciones ciudadanas, las redes y empresas de medios masivos de comunicación. La centralidad de la superestructura la ostenta el Comité Cívico Pro Santa Cruz, por su capacidad de producción y reproducción ideológica, de coordinación entre los diversos niveles,

instancias e instituciones del aparato ideológico, además de concentrar la representación de una suerte de élite de élites con la finalidad de intermediar la relación entre la sociedad civil y el Estado (Argirakis Jordán, 2022b).

En el marco del paro cívico indefinido de 2022, el Comité Cívico Pro Santa Cruz mantuvo las funciones de organización y coordinación del aparato ideológico departamental; sin embargo, la gestión política regional y las vocerías políticas fueron operadas por el Comité Interinstitucional, instancia compuesta por las instituciones que conforman el bloque de poder de las derechas cruceñas.

La sociología política del paro cívico indefinido de 2022

Durante la realización del paro cívico se pudo reconocer una sociología política o la estratificación de clases sociales ubicadas territorialmente en las más de 100 rotondas urbanas distribuidas en los anillos concéntricos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en función de la medida de protesta. Dicha sociología política funge de evidencia empírica que permite comprender la organización, cohesión, fuerza y nivel de control territorial del paro cívico indefinido (que determina el éxito o fracaso del mismo), así como sus alcances y limitaciones en el contexto de las fluctuantes correlaciones de fuerzas entre el bloque de derechas cruceñas y el Gobierno Central.

Clase alta señorial: quienes acataron el paro personalmente por convicción, por los intereses o agenda sociopolítica que comparten por conciencia de clase, sobre la base de los privilegios del regionalismo o la blanquitud. Sin embargo, en los hechos, sus actividades económicas productivas siguieron funcionando en privado, provocando críticas, reclamos e interpelación al interior de la sociedad cruceña: los ricos pararon en público, pero siguieron trabajando en privado, los pobres o clases populares fueron obligados a parar, sin contar con posibilidades de percibir ingresos o sustento.

Clase media, aspirantes a clase alta: quienes acataron el paro por militancia regionalista² y vocación aspiracional de acceder a formar parte de la élite u oligarquía cruceña. Esta facción de clase rentabilizó algún tipo de beneficio o remuneración indirecta por medio de las redes de las relaciones sociales con el bloque reaccionario de derechas vinculado al gobernador Luis Fernando Camacho.

Clase asalariada del paro: grupos de personas que se beneficiaron con el paro cívico como fuente de ingreso personal, considerando que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra cuenta con aproximadamente 100 rotondas distribuidas entre los anillos urbanos de la ciudad. Por lo tanto, la supervisión del control territorial de dichas rotondas se convierte en un requerimiento logístico que determina el éxito o fracaso de las medidas de presión.

2 Para la consolidación de una clase dominante se ha tenido que construir y articular un pensamiento legitimador que justifique el liderazgo y la conducción de la mencionada élite. Este pensamiento legitimador construido es el regionalismo, que se erige en una supra-ideología, tal como lo asume el historiador José Luis Roca (1980). Asimismo, este autor plantea que el regionalismo ha sido el verdadero motor de la historia boliviana.

Dicha facción acató el paro porque se volvió un ingreso diario tipo *per diem* o una alternativa económica en el marco de la suspensión de actividades, bajo un criterio pragmático secundado por el argumento regionalista.

Lumpen o cuenta-propistas: grupos de personas que cobraban peaje en los puntos de bloqueos del paro cívico, quienes permitían o no el paso a los transeúntes. Durante los 36 días del paro cívico, imperó una anomia social que cobijó conductas irregulares que no hubieran sido posibles en otro momento y posiciones de empoderamiento al calor de las medidas de hecho.

Alienados sociales o invisibles: bloque radicalizado de gente que es contratada para reproducir actos vandálicos y eventos violentos; los encapuchados que salieron durante el paro a vandalizar y saquear a nombre del regionalismo y de la cruceñidad.

Rupturas y contradicciones al interior de Santa Cruz luego del paro cívico indefinido

El paro indefinido de 2022 ocasionó una serie de rupturas y contradicciones al interior del departamento de Santa Cruz, lo que permitió visibilizar diversos niveles de análisis y matices sociopolíticos en la región que las derechas cruceñas presentan como territorio homogéneo y unidimensional.

Rupturas territoriales a nivel de los gobiernos subnacionales. Quiebres en la supuesta cohesión del bloque territorial de los gobiernos subnacionales que componen el

Comité Interinstitucional con la salida del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a cargo del alcalde Johnny Fernández (del partido político Unidad Cívica Solidaridad [UCS], fundado en 1989), y el fortalecimiento del escenario político de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ), como espacio institucional de contrapeso político territorial al Comité Interinstitucional. Es decir, creciente contradicción y confrontación política entre los municipios del departamento de Santa Cruz, debilitando la cohesión del Comité Interinstitucional.

Agudización de la lucha de clases. Fracturas en la aparente cohesión social cruceña movilizada por la causa regionalista, a efectos de las contradicciones de intereses de clases en el bloque social movilizado durante el paro cívico indefinido. Es decir, contradicción entre el contenido ideológico y la narrativa del regionalismo cruceño, y la realidad material de la economía popular de la gran mayoría de la población, que sufrió en su economía diaria por los efectos del paro cívico.

Funcionamiento de una estructura de paraestatalidad en el departamento de Santa Cruz. El paro indefinido evidenció una serie de estructuras de paraestatalidad en el departamento de Santa Cruz, ya que durante el paro se articuló una suerte de gobierno paralelo ubicado desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz —el “Gobierno moral de los cruceños”—. Desde este “Gobierno moral”, se ejerció el control territorial de Santa Cruz —por medio del control de numerosas rotondas y distritos urbanos de la ciudad— e inclusive

algunos municipios de la Región Metropolitana del departamento de Santa Cruz. A su vez, otro dispositivo de paraestatalidad se constató en el funcionamiento de un aparato coercitivo y coactivo localizado en la acción de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y demás redes de activismo parapolítico y hasta paramilitar que ejercen violencia y medidas de disciplinamiento fáctico en el territorio. Por ejemplo, la quema de basura en las puertas de domicilios o negocios privados, grafitis con incitación a la violencia hacia establecimientos comerciales, señalamientos públicos e inclusive violencia física hacia personas que no acatan el pensamiento y lineamientos del Comité Cívico, como en el caso de la asambleísta Departamental del MAS Muriel Cruz, el pasado 9 de junio de 2023.

La agudización de diversas contradicciones o clivajes políticos que profundizaban la polarización política. Entre las principales estaba la recurrencia a la tensión entre el Estado y la región de Santa Cruz, el Estado Plurinacional y la bandera política del federalismo, la plurinacionalidad y la identidad cruceña, el MASismo y el anti MASismo; la agudización de las contradicciones étnicas y raciales entre indígenas y blancos, entre collas (identidad del occidente andino del país) y cambas (identidad del oriente amazónico del país).

Balance del paro cívico de los 36 días en Santa Cruz, a tres años del golpe de Estado de 2019

Luego de 36 días de paro cívico, millonarias pérdidas en la economía pública y privada de

la región y, por irradiación, afectación a la economía nacional, se resalta la importancia de la plaza política cruceña, por su peso económico y el consiguiente peso político, por lo que Santa Cruz se convirtió en el territorio que dirime la estabilidad económica y política a nivel nacional. Es decir, con el control territorial de Santa Cruz, se logra dirimir el control de la estabilidad económica y política del país.

Sin embargo, la flagrante evidencia de las fracturas y contradicciones reveladas en los 36 días del paro cívico ayudan a constatar que Santa Cruz no es un territorio homogéneo y unidimensional, ni responde a la conducción unívoca del Comité Pro Santa Cruz, ni al bloque de poder oligárquico feudal reaccionario del gobernador Luis Fernando Camacho, pero tampoco al Gobierno Central o al oficialismo del MAS.

Uno de los hallazgos del balance de los 36 días del paro cívico fue la necesidad de interpretar las diferencias entre las posiciones de las derechas moderadas (institucionalistas o que respetan los límites que impone la Constitución Política del Estado y la democracia) y las derechas violentas y reaccionarias, para que las primeras no graviten por presiones de facción de clase hacia las segundas y se consolide el proyecto oligárquico feudal reaccionario y violento liderado por el gobernador Luis Fernando Camacho.³

Por otro lado, a partir de las anteriores rupturas, se vislumbra que se abre un nuevo escenario político en Santa Cruz, que

3 El gobernador del departamento de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, uno de los principales líderes de la oposición de derechas en Bolivia, fue arrestado el 28 de diciembre de 2023 en el marco de las investigaciones de los eventos que llevaron al derrocamiento del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.

inevitablemente cambia la naturaleza del proceso de intercambio político cruceño y la relación política con el nivel del Gobierno Central. La coyuntura después del paro cívico demuestra que fracasó el intento de Camacho por lograr la agregación política nacional de las clases señoriales del país (es decir, la unificación de todo el espectro ideológico de las derechas conservadoras y reaccionarias de Bolivia), ya que la narrativa de la demanda por el censo 2023 se realizó en clave regionalista, racista y violenta. Por ello, la estrategia de agitación política nacional basada en un discurso de clase no prosperó y, a su vez, se abrieron inmensas oportunidades políticas al interior del campo popular en Santa Cruz.

Finalmente, un constante reclamo del progresismo cruceño ha sido referente a la lógica del Gobierno Central del MAS de acercarse a la región de Santa Cruz en clave electoral y de apoyo coyuntural, por lo que se percibe una deuda histórica con el proceso de cambio cruceño que busca consolidar el proyecto político contrahegemónico del campo popular. Es decir, se vuelve imperante apoyar la consolidación del masismo en clave cambia.

Referencias

- Argirakis Jordán, Helena. (2022a). El golpe de Estado combinado en Bolivia. En: Luis Claros y Vladimir Díaz Cuéllar (coords.), *Crisis política en Bolivia 2019-2020*, pp. 169-194. Fundación Rosa Luxemburgo y Plural editores.
- Argirakis Jordán, Helena. (2022b). *Poder, correlaciones de fuerzas y hegemonía. Análisis del devenir del bloque de poder cruceño y la disputa política por el control del Estado, ciclo 2004-2010*. Vicepresidencia del Estado Plurinacional. (Inédito)
- Roca, José Luis. (1980). *Fisonomía del regionalismo boliviano*. Los Amigos del Libro.

Bolivia: Fuerzas políticas y económicas en Santa Cruz de la Sierra y la resistencia

Publicado por: Fundación Rosa Luxemburg Oficina Región Andina
Miravalle N24-728 y Zaldumbide
Teléfono: (593-2) 2553771
info.andina@rosalux.org / www.rosalux.org.ec
Quito · Ecuador

Coordinación de la publicación: Belén Cevallos y Pablo Guzmán
Revisión del texto: Verónica Vacas
Diseño: Freddy Coello
Foto portada: Jorge Ibañez

Esta publicación fue auspiciada por la Fundación Rosa Luxemburg, con fondos del Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva de los/as autores/as y no refleja necesariamente la postura de la FRL.



Este material está bajo licencia Creative Commons “Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Unported” (CC BY-SA 4.0). Para consultar el acuerdo de licencia, véase <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.es>, y un resumen (no sustitutivo) en <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>.

Se pueden utilizar partes individuales de esta publicación si se hace la referencia apropiada a la obra original.